



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

1267/2023

Incidente Nº 2 - ACTOR: OVIEDO, JULIETA MICAELA s/INC EJECUCION DE HONORARIOS

RESISTENCIA, 22 de diciembre de 2025. -LR

VISTOS:

Estos autos caratulados: **"Incidente Nº 2 - ACTOR: OVIEDO, JULIETA MICAELA s/INC EJECUCION DE HONORARIOS"**, Expte. Nº FRE 1267/2023/2/CA5, provenientes del Juzgado Federal Nº 2 de Formosa y;

CONSIDERANDO:

1. Que en fecha 16/10/2025 la Sra. Jueza de la anterior instancia reguló honorarios profesionales al Dr. Manuel Antonio Mariño Ávalos, por su actuación en la presente ejecución, en 1.25 UMA (conforme Resolución SGA Nº 2226/2025 de la CSJN).

Para fijar los mismos, destacó que la presente constituye una ejecución de honorarios, razón por la cual resultan aplicables los arts. 54 -tercer párrafo- y 41 de la Ley Nº 27.423.

A los fines de establecer la base regulatoria, señaló que deben observarse los parámetros que brinda el art. 22 de la ley arancelaria, por lo que, tomando ambas planillas aprobadas, la suma asciende a \$922.782,88, monto que debe pasarse a su equivalente en UMA vigente al momento de la regulación.

Consideró que no resulta aplicable el art. 20 porque el letrado actúa en su propio interés, por lo tanto -afirmó-, no asume la doble función de patrocinante y apoderado.

2. Disconforme con dicha regulación, en fecha 16/10/2025 el Dr. Manuel Antonio Mariño Ávalos interpuso recurso de apelación, alegando que los honorarios fijados resultan bajos.

Denuncia que la sentenciante aplica de manera groseramente incorrecta los preceptos legales en los que se funda la decisión.

En relación a la base regulatoria, expone brevemente los antecedentes respecto de las planillas que fueron practicadas, y luego cita el art. 22 de la ley arancelaria para afirmar que dicha norma, a los efectos de no licuar los honorarios profesionales por el transcurso del tiempo y la depreciación monetaria, los nomina como una deuda de valor que debe expresarse en UMA. Es decir, cuestiona que la juzgadora haya tomado



como base regulatoria el monto resultante en dinero, evitando la actualización de la misma.

Afirma que los porcentajes previstos en la escala del art. 21 de la Ley N° 27.423 no se aplican directamente sobre la base regulatoria, sino que deben conjugarse con la exigencia prevista en su segundo párrafo.

Señala que la magistrada de grado omitió aplicar el art. 20 de la ley, por lo que los honorarios deben incrementarse en un 40% por haber actuado en el doble carácter.

Resalta que en estos casos en donde se litiga por derecho propio, deben regularse los honorarios en el doble carácter. Agrega que la Corte Suprema ya ha resuelto esta cuestión en el sentido expuesto, debiendo el juzgado de primera instancia adecuar sus decisiones al órgano jerárquico superior, máximo intérprete de nuestra Carta Magna.

Hace reserva del Caso Federal y finaliza con petitorio de estilo.

El recurso fue concedido en relación y con efecto suspensivo. Corrido el pertinente traslado, fue contestado por la parte demandada.

Elevada la causa ante esta Alzada, se llamó Autos para Resolver el 28/10/2025.

3. Así las cosas, corresponde exponer la normativa arancelaria que resulta aplicable en la presente causa a los fines de controlar los honorarios regulados en la instancia de origen.

A tal efecto, es dable resaltar que el Dr. Manuel Antonio Mariño Ávalos promovió la presente ejecución con el objeto de obtener el cobro de sus honorarios profesionales fijados en sentencias judiciales. Es decir, se trata de una acción por cobro de honorarios.

Teniendo en cuenta tal circunstancia, resulta aplicable el art. 54 -tercer párrafo- de la Ley N° 27.423 que prevé que la acción por cobro de honorarios regulados judicialmente, tramitará por vía de ejecución de sentencia. En virtud del mismo, resulta aplicable el art. 41 de la ley arancelaria, el cual establece la forma en que deben regularse los honorarios en el procedimiento de ejecución de sentencias.

Siguiendo los lineamientos que brinda el art. 41, la regulación se fija aplicando la mitad de la escala del art. 21 que -cabe aclarar-, si bien siempre conjugamos la escala con lo previsto en el segundo párrafo del artículo, en el caso particular de autos, esto no rige porque la base regulatoria encuadra en la primera escala, es decir, no existe grado inmediato anterior.

Al no haberse opuesto excepciones, tal resultado se reduce en un 10%.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

A esto debe adicionarse un 40% según el art. 20 de la ley arancelaria.

Todo ello teniendo en cuenta el valor de la UMA vigente al momento en que la juzgadora efectuó la regulación, este es, de \$77.229 según Resolución SGA N° 2226/25 de la CSJN.

4. El cálculo realizado en base a los parámetros expuestos nos arroja como resultado que los emolumentos fijados pueden considerarse bajos, por lo que corresponde su modificación.

Cabe señalar que, si bien los artículos mencionados en el Considerando anterior fueron correctamente citados por la magistrada de la anterior instancia en la resolución apelada (arts. 41 y 54 -tercer párrafo-), omitió aplicar el art. 20 de la ley arancelaria que, tal como lo afirma el recurrente en sus agravios, en supuestos como el presente sí corresponde su aplicación.

No desconocemos que la cuestión respecto del alcance de la retribución en estos casos en que el abogado actúa en su propio interés ha generado un debate en la jurisprudencia nacional, más concretamente sobre si corresponde considerar al abogado en asunto propio como letrado únicamente o, cabe asignarle -a los fines regulatorios- la doble calidad de letrado y procurador. La postura mayoritaria es la segunda, en la que nos enrolamos.

Nuestro Máximo Tribunal juzgó (en el caso "Anzorreguy") que era impropio, a los fines específicamente arancelarios, distinguir entre el abogado que se patrocina a sí mismo y el procurador -o abogado que actúa como procurador- que lo hace en la causa que a él le interesa personalmente.

Añadió la Corte Suprema que no se aprecia la razón por la cual se admite que un profesional sea patrocinante de sí mismo y no sea procurador de sí mismo, aun cuando en el segundo caso no haya representación, porque no por tal circunstancia deja de existir labor profesional retribuable. Tanto el patrocinio como la procuración habrían devengado honorarios en caso de ser encomendados a otro profesional, de manera que, si el interesado cumple una u otra por sí mismo, esa circunstancia no tiene porqué beneficiar al condenado en costas eximiéndolo de responsabilidad por la labor procuratoria desempeñada. (Cfr. Guillermo Mario Pesaresi. *"Honorarios en la Justicia Nacional y Federal. Ley 27.423, Anotada, Comentada y Concordada"*, 2da. Edición, Ed. Cathedra Jurídica, 2021, p. 204/205).

Consecuentemente, procede hacer lugar al recurso de apelación incoado por el Dr. Manuel Antonio Mariño Ávalos, modificando los honorarios regulados en primera instancia por el presente proceso de ejecución de honorarios en las sumas que se determinan en la parte



resolutiva, con la aclaración de que los montos en pesos estarán expresados teniendo en cuenta el valor actual de la UMA (\$84.963 conforme Resolución SGA N° 3160/2025 de la CSJN) tal como lo ordena el art. 51 de la Ley N° 27.423.

Por los fundamentos expuestos, por mayoría, SE RESUELVE:

1. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Manuel Antonio Mariño Ávalos en fecha 16/10/2025 y, consecuentemente, MODIFICAR los honorarios regulados en primera instancia por la presente ejecución de honorarios, fijándolos en 2,82 UMA (equivalentes, en la actualidad, a PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS: \$239.595,66) como patrocinante; y en 1,12 UMA (equivalentes, en la actualidad, a PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS: \$95.158,56) como apoderado. Más IVA si correspondiere.

2. COMUNICAR a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto dependiente de la CSJN (Acordada N° 10/2025 de ese Tribunal).

3. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NOTA: La Resolución precedente fue dictada por los Sres. Jueces de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del Reg. Just. Nac.) suscripto en forma electrónica (arts. 2 y 3 de la Acordada N° 12/2020 de la CSJN).

SECRETARIA CIVIL N° 1, 22 de diciembre de 2025.

